



JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE FLORENCIA, CAQUETÁ

Florencia, 30 de noviembre de 2020

MEDIO DE CONTROL	EJECUTIVO
RADICADO:	18001233100220090037800
DEMANDANTE:	SANDRA HERRERA SALGADO Y OTROS josebalmorezuluagag@hotmail.com ginaflorez83@hotmail.com
DEMANDADO:	NACION-FISCALIA GENERAL DE LA NACION
AUTO N°:	A.I.OR. 74-II-2020

I. ASUNTO.

Procede el Despacho a estudiar la solicitud de medida cautelar, para decidir sobre su decreto.

II. ANTECEDENTES

La apoderada de la ejecutante mediante escrito presentado el 25/08/2020 (Archivo #14 y 15 del expediente digital) solicita que se decrete la medida cautelar, correspondiente al EMBARGO Y RETENCIÓN de los dineros que posee en las cuentas corrientes, ahorro, CDT, CDAT de la entidad Ejecutada NACION-FISCALIA GENERAL DE LA NACION- con Nit: 800.152.783-2 en las siguientes entidades financieras: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA, BANCOLOMBIA, DAVIVIENDA, BANCO BBVA, BANCO CAJA SOCIAL, BANCO DE OCCIDENTE, BANCO DE BOGOTÁ, BANCO POPULAR, BANCO AV VILLAS, BANCO CITY BANK, BANCO COLPATRIA.

III. CONSIDERACIONES.

El artículo 599 de la Ley 1564 de 2012 – CGP-, dispone en relación con las medidas cautelares de embargo y secuestro en los procesos ejecutivos:

“Desde que se presente la demanda ejecutiva podrá el demandante pedir el embargo y secuestro de bienes del demandado...”

Así mismo, el numeral 11 del artículo 593 del CGP, sostiene que para efectuar los embargos se procederá así:

“11. El de sumas de dinero depositadas en establecimientos bancarios y similares, se comunicará a la correspondiente entidad como lo dispone el inciso primero del numeral 4, debiéndose señalar la cuantía máxima de la medida, que no podrá exceder del valor del crédito y las costas, más un cincuenta por ciento. Aquellos deberán consignar las sumas retenidas en la cuenta de depósitos judiciales, dentro de los tres días siguientes al recibo de la comunicación; con la recepción del oficio queda consumado el embargo.”

Conforme a lo dispuesto en la aludida normatividad, y atendiendo que el 13 de marzo de 2020 se profirió auto que ordena seguir adelante con la ejecución contra la NACION-FISCALIA GENERAL DE LA NACION, conforme lo ordenó el mandamiento de pago el 10 de abril de 2019, quedando debidamente ejecutoriada la misma, observa el despacho que atendiendo la firmeza de la sentencia favorable, se accederá a las medias cautelares solicitadas, esto es, EMBARGO Y RETENCIÓN de los dineros que posee en las cuentas corrientes, ahorro, CDT, CDAT de la entidad Ejecutada NACION-FISCALIA GENERAL DE LA NACION- con Nit: 800.152.783-2 en las siguientes entidades financieras: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA, BANCOLOMBIA, DAVIVIENDA, BANCO BBVA, BANCO CAJA SOCIAL, BANCO DE OCCIDENTE, BANCO DE BOGOTÁ, BANCO POPULAR, BANCO AV VILLAS, BANCO CITY BANK, BANCO COLPATRIA.

Ahora bien, debido a que la obligación que se ejecuta se encuentra fundada en una sentencia judicial, se tiene que el embargo como medida cautelar, busca garantizar el cumplimiento de la obligación debida y evitar la insolvencia del deudor. No obstante lo anterior, constitucional y legalmente se ha consagrado la inembargabilidad de algunos bienes del Estado, de conformidad

con lo dispuesto en la Ley 1751 del 16 de febrero de 2015, el artículo 594 de la Ley 1564 de 2012- Código General del Proceso-, la Circular 013 del 13 de julio de 2012 de la Contraloría General de la Republica, los artículos 48 y 63 de la Constitución Política, 36 de la Ley 1485 de 2011, 8 del Decreto 050 de 2003, 91 de la Ley 715 de 2001, 18 y 19 del Decreto extraordinario 111 de 1996 y 134 y 182 de la Ley 100 de 1993, son recursos inembargables los siguientes:

1. Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la nación o de las entidades territoriales.
2. Las cuentas del sistema general de participación.
3. Las regalías.
4. Las dos terceras partes de la renta bruta de un municipio.
5. Los recursos públicos que financien la salud.
6. Los recursos del sistema de seguridad social.
7. Rentas de destinación específica.
8. Los demás recursos que por su naturaleza o destinación de la ley le otorgue la condición de inembargable.

Sin embargo, el parágrafo del artículo 594 del CGP establece que dicha regla de inembargabilidad no reviste un carácter absoluto, dado que allí se evidencia la existencia de excepciones previstas en la ley para que sea operante la medida cautelar, no obstante su carácter de inembargable, así tenemos que la Corte Constitucional¹, al efectuar un estudio de constitucionalidad de la norma en comento, contempló excepciones a la regla general para armonizar el principio de inembargabilidad de recursos públicos con otros principios, valores y derechos constitucionales, entre los que se encuentran, la dignidad humana, la vigencia de un orden justo y el derecho al trabajo así:

“El artículo 63 de la Constitución dispone que «Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables”.

A la luz del anterior precepto debe entenderse que además de los bienes señalados expresamente en éste, el Constituyente le otorgó al legislador la facultad para determinar, entre otros, los bienes que tienen naturaleza de inembargables, del cual también se deriva el sustento constitucional del principio de inembargabilidad presupuestal.

“Por su parte, la Corte Constitucional, al fijar el contenido y alcance del artículo 63 sobre el tema en discusión, ha sostenido que el principio de inembargabilidad es una garantía que se hace necesario preservar y defender, con el fin de proteger los recursos financieros del Estado, en particular, los destinados a cubrir las necesidades esenciales de la población. Esto, por cuanto si se permitiera el embargo de todos los recursos y bienes públicos (i) el Estado se expondría a una parálisis financiera para realizar el cometido de sus fines esenciales, y (ii) se desconocería el principio de la prevalencia del interés general frente al particular, el artículo 1 y el preámbulo de la Carta Superiora.

Sin embargo, contempló excepciones a la regla general para armonizar el principio de inembargabilidad de recursos públicos con otros principios, valores y derechos constitucionales, entre los que se encuentran, la dignidad humana, la vigencia de un orden justo y el derecho al trabajo. Éstas son:

- (i) Satisfacción de créditos u obligaciones de origen laboral con el fin de hacer efectivo el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas”.
- (ii) Pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y la realización de los derechos en ellas contenidos
- (iii) Títulos emanados del Estado que reconocen una obligación clara, expresa y exigible.²

¹ Sentencia .C-543 de 2013

² La sentencia C-103 de 1994 (Jorge Arango Mejía), se estableció una segunda excepción a la inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación, así: para hacer efectiva una obligación que conste en un acto administrativo que preste mérito ejecutivo, esto es, que sea expresa, clara y exigible, procederá la ejecución después de los diez y ocho (18) meses

Las anteriores excepciones son aplicables respecto de los recursos del SGP, siempre y cuando las obligaciones reclamadas tuvieran como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educación, salud, agua potable y saneamiento básico).³

Mediante sentencia de tutela del 06 de febrero de 2020, la Sección Tercera subsección A del Consejo de Estado, en el radicado número: **11001-03-15-000-2019-04378-00(AC)**, reiteró lo dicho por esa Corporación⁴ sobre la inembargabilidad de los recursos públicos y el procedimiento para el pago de créditos a cargo del Estado, así:

“... el Consejo de Estado en sentencia del 15 de diciembre de 2017, en la que la Sección Primera de esta Corporación, en sede de tutela, señaló la obligatoriedad del precedente fijado por la Corte Constitucional tratándose de la aplicación de las excepciones al principio general de inembargabilidad de los recursos públicos. Sobre el particular, dicha Sección señaló:

“De conformidad con lo analizado en precedencia, la Sala considera que el Juzgado al denegar el embargo de los dineros depositados en la cuenta de Fondos Especiales, los cuales hacen parte del presupuesto general de la Nación, para respaldar el pago de obligaciones laborales reconocidas en una sentencia judicial, no sólo desconoció el precedente jurisprudencial sentado por la Corte Constitucional en relación con el principio de inembargabilidad de los recursos públicos y sus excepciones, sino que también incurrió en un defecto sustantivo por indebida interpretación del artículo 594 del CGP, lo que implica la vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia del actor.

“Lo anterior, habida cuenta de que como se ha insistido a lo largo de esta sentencia, la prohibición de embargo de los recursos públicos siempre ha estado presente en nuestro ordenamiento jurídico y ha sido declarada exequible por la Corte Constitucional, la cual ha indicado de manera reiterada, pacífica y uniforme cómo deben ser interpretadas las disposiciones que contienen esta regla y ha fijado las excepciones a la misma.

“La Sala destaca que el hecho de que el aludido principio fuese incluido nuevamente en el CGP y el CPACA, no implica per se que fueron derogadas las demás disposiciones que también lo contenían, salvo las previstas en el CPC y el CCA, ni que se deba desconocer la interpretación que de las mismas efectuó la Corte, máxime si se tiene en cuenta que el fin perseguido en todas ellas es el mismo, que no es otro que el de ordenar la prohibición de embargar las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación, cuya existencia en el ordenamiento jurídico está condicionada a la interpretación que ha hecho la Corte y que, conforme se afirmó en la sentencia C-543 de 2013, siguen vigentes e incluso deben ser atendidas por los operadores judiciales para la aplicación del parágrafo 2 del artículo 195 del CPACA y los numerales 1, 4 y el parágrafo del artículo 594 del CGP, aunado a que esta última disposición permite invocar excepciones a la regla general siempre y cuando estén contenidas en la ley”⁵.

La anterior posición ha sido reiterada por esta Corporación, al respecto, ha señalado:

“...se observa de la transcripción antes efectuada, en un primer momento la autoridad judicial aquí accionada determinó que eran tres las excepciones fijadas por la Corte Constitucional al principio de inembargabilidad, como son: 1. Pago de créditos u obligaciones de origen laboral, 2. Pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y la realización de los derechos en ellas contenidos y 3. Títulos emanados del Estado que reconocen una obligación clara, expresa y exigible.”

Así las cosas, es claro que de conformidad con las normas y las jurisprudencias citadas y transcritas anteriormente, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación antes referidos son inembargables lo que impone al juez el deber de invocar en la orden de embargo el fundamento legal.

³ C-793 de 2002. M.P. Jaime Córdoba Triviño

⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 22 de agosto de 2019, Consejero ponente: William Hernández Gómez, Radicación 2019-03694-00

⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de 2017, Consejera ponente: María Elizabeth García González, Radicación 2017-01532-01.

En el caso en concreto, se observa que la obligación que se pretende ejecutar por la parte actora, se deriva de la sentencia del 25/07/2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá (Archivo 5, folios 8 a 21 del expediente digital), la cual fue modificada en segunda instancia por el Consejo de Estado- Sección Tercera, subsección C, del 28/05/2015 (Archivo 5 folios 22 a 73 del expediente digital), por consiguiente, es evidente que la obligación versa sobre una sentencia judicial, de tal forma que se configura uno de los supuestos que exceptúan el principio de inembargabilidad.

Razón por la cual, bajo los últimos pronunciamientos del máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se hace necesario indicar que en aplicación a lo establecido por el inciso 2 del artículo 285 del CGP⁶, el cual permite esclarecer el asunto dada la configuración de dos de los supuestos que exceptúan el principio de inembargabilidad, ello en procura de garantizar el derecho al debido proceso de las partes y el valor vinculante del precedente judicial del Consejo de Estado, se advierte que el decreto de la medida cautelar se hace procedente contra cuentas inembargables y se lo cual se enfatizará a las entidades bancarias con el fin de que en el término oportuno procedan con el embargo respectivo, so pena de las sanciones a que hubiere lugar.

Así las cosas, conforme el artículo 599 del C.G.P., se establece que en materia de embargo y secuestro en procesos ejecutivos, el juez “...podrá limitarlos a lo necesario; el valor de los bienes no podrá exceder del doble del crédito cobrado, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas”, por consiguiente, en el presente caso vemos que el mandamiento de pago fue \$237.873.477.947.00 (capital) y al no haber sido condenado en costas en ninguna instancia, “...más un cincuenta por ciento (50%)” según el numeral 10 del artículo 593 del CGP⁷, dicho límite alcanza la suma de \$440.000.000.00. m/cte.

Por lo anteriormente expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia:

RESUELVE:

PRIMERO: DECRETAR el Embargo y Retención de las sumas líquidas de dinero o las que llegaren a ingresar o recaudar en las cuentas corrientes, ahorro, CDT, CDAT de la entidad Ejecutada NACION-FISCALIA GENERAL DE LA NACION- con Nit: 800.152.783-2 en las siguientes entidades financieras: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA, BANCOLOMBIA, DAVIVIENDA, BANCO BBVA, BANCO CAJA SOCIAL, BANCO DE OCCIDENTE, BANCO DE BOGOTÁ, BANCO POPULAR, BANCO AV VILLAS, BANCO CITY BANK, BANCO COLPATRIA, limitando la suma en \$440.000.000.00. m/cte.

SEGUNDO: Por Secretaría, comuníquese la presente decisión a las entidades bancarias anunciadas, mediante entrega del correspondiente oficio, señalando la cuantía máxima de la medida e informando que con las sumas embargables deben constituir certificado de depósito Judiciales N° 180012045004 del Banco Agrario de Colombia, a órdenes del Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia, dentro de los tres (03) días siguientes al recibo de la comunicación; así mismo, que con la recepción del oficio queda consumado el embargo.

ADVIÉRTASE a las citadas entidades bancarias, que la medida procede contra cuentas inembargables, dada la configuración de dos de los supuestos que exceptúan el principio de inembargabilidad de las mismas, en relación a los bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la nación o de las entidades territoriales, por las razones expuestas en el presente proveído, ello con el fin de que en el término oportuno procedan con el embargo respectivo, so pena de las sanciones a que hubiere lugar.

TERCERO: Una vez quede ejecutoriada la presente decisión para todas las partes, se impone a

⁶ **“ARTÍCULO 285. ACLARACIÓN.** La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutive de la sentencia o influyan en ella.

En las mismas circunstancias procederá la aclaración de auto. La aclaración procederá de oficio o a petición de parte formulada dentro del término de ejecutoria de la providencia.

La providencia que resuelva sobre la aclaración no admite recursos, pero dentro de su ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra la providencia objeto de aclaración.”

⁷ “...no podrá exceder del valor del crédito y las costas más un cincuenta por ciento (50%)

la parte ejecutante el deber de reclamar los oficios y radicarlos ante dichas entidades dentro de los 5 días siguientes a ser reclamados. Para lo cual se le fija como turno el día 9 de diciembre de 2020 en horario de 9:00am a 9:30am, debiendo acercarse a las instalaciones del Despacho judicial, so pena de entender desistida la presente actuación procesal.

CUARTO: ACEPTAR la renuncia presentada por la apoderada de la parte actora GINA LORENA FLOREZ SILVA, conforme el memorial visto en el archivo # 19 del expediente digital.

QUINTO: RECONOCER personería jurídica al Profesional del Derecho JOSE BALMORE ZULUAGA GARCIA, como apoderado de la parte actora, para que actúe en los términos, condiciones y para los fines establecidos en el poder conferido y visto en el archivo #22 del expediente digital.

Notifíquese y Cúmplase,

GINA PAMELA BERMEO SIERRA
Juez

Firmado Por:

GINA PAMELA BERMEO SIERRA
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO ADMINISTRATIVO DE FLORENCIA (4)

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **4c5400b02aeeb90cdeee51fbd47585231de2800672ce5715a48448d205948ee3**
Documento generado en 30/11/2020 05:33:11 p.m.

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>